

*Semilegitimidad***Mala Defensa de un mal Triunfo**

LORENZO MEYER

**P**OR un tiempo muy largo, prácticamente desde su nacimiento, a la sociedad mexicana la han forzado a vivir con una espina clavada en el centro de su conciencia cívica. Y tal espina es, ni más ni menos, la diferencia sistemática entre los grandes pronunciamientos hechos desde el poder y lo que realmente ese poder hace. Otra manera de decir lo mismo es ésta: en México la mentira ha sido por mucho tiempo el hecho a partir del cual se ha establecido la relación entre gobernantes y gobernados.

Toda estructura de autoridad entraña una situación de explotación. Desde siempre el poder político ha significado, entre otras cosas, institucionalizar ventajas unilaterales de un grupo sobre otro. No se necesita ser marxista para comprender esta verdad, basta observar atentamente los hechos. Sin embargo, aunque basadas en la explotación y la desigualdad, no todas las estructuras políticas o relaciones institucionales de poder, son, a la vez, violadoras sistemáticas de los principios generales en que dicen estar fundadas. Es justamente la existencia de una relativa congruencia entre lo que la autoridad dice y lo que hace eso que en ciertos países y épocas ha constituido una de las más vigorosas fuentes de legitimidad de sus élites políticas. Es esa congruencia y el sentido de solidaridad colectiva que genera, lo que permite sobrellevar con cierta dignidad el yugo que siempre ha significado para la mayoría su sometimiento a quienes controlan las instituciones e instrumentos de poder.

★

**A** QUI en México, por razones muy complejas y que no viene al caso examinar ahora, la vida política no se ha beneficiado de la fuerza que da la congruencia entre lo dicho y lo hecho, entre lo legal y lo real. Los marcos constitucionales mexicanos —las reglas básicas del juego político— nunca han sido respetados durante mucho tiempo por quienes han sido los encargados de ponerlos en práctica y defenderlos. Y esto es válido tanto para la Carta Magna de 1824 como en el caso de la actual. Nuestras constituciones y reglamentos nunca han surgido como un reflejo de la realidad sino como proyectos para reformarla. En la práctica, y debido a incompetencias y corrupción del liderato político, muchas de sus propuestas y postulados se han quedado en compromisos sólo parcialmente cumplidos, en incongruencias permanentes. Uno de los ejemplos más claros de una disposición constitucional que nunca ha llegado a ser una realidad plena entre nosotros es, justamente, la del respeto al sufragio. Las excepciones sólo confirman la regla.

En vísperas de los últimos comicios federales, los del 6 de julio, una vez más, el responsable de llevar a cabo el proceso electoral, el Presidente de la República, se comprometió de manera expresa y solemne ante todos los mexicanos y la opinión pública internacional, a que el proceso que iba a tener lugar —enmarcado por una legislación elaborada exprofeso y que, bajo la apariencia de equidad, dio claras ventajas al gobierno y a su partido— siguiera fielmente la letra de la ley.

★

**P**ERO, una vez más, ocurrió lo previsible, el triunfo del pasado sobre la modernidad prometida: lo persistente de la incongruencia entre lo que se dice y lo que se hace, entre lo que debe ser y lo que realmente es. No hubo transparencia y sí, en cambio, cifras y situaciones incompatibles con el sentido común, con la lógica de las circunstancias.

Hoy, sin embargo, la violación de la palabra empeñada no parece que vayan a aceptarla resignadamente como en el pasado. No, todo indica que por fin una parte importante de la sociedad mexicana —no sabemos aún su dimensión exacta— ha decidido movilizarse en defensa del respeto al voto, de la congruencia, de una legalidad largamente violada. Se trata de actuar de manera pacífica, pero clara, contra los violadores de la palabra empeñada. Y no es un mero desfogue de frustraciones lo que anima a los inconformes activos, sino el deseo de dejar atrás esa vergonzosa etapa de los comicios sin sentido, de las elecciones sin competencia, del sufragio sin efectividad, del engaño impune, de la irresponsabilidad como sistema de gobierno.

Los defensores inteligentes y modernos de la supuesta victoria del PRI —es decir, quienes no usan los argumentos estúpidos y peyorativos de los representantes priistas en la Comisión Federal Electoral— parten de varios hechos reales para defender la legitimidad de lo ocurrido el 6 de julio: que las elecciones del mes pasado han sido las más competidas y vigiladas del México posrevolucionario, que fueron muy concurridas, y que la cifra de una abstención del 50% es similar a la de los países de democracia política real. Según ellos, esa abstención que parece alta es justamente la muestra de que las elecciones inventadas no han sido éstas, sino todas las del pasado, todas ésas en que los candidatos presidenciales priistas dijeron haber triunfado con 70, 80 ó 90% de los votos de una masa que equivalía a 70, 80 y 90% del padrón electoral, todo ello pese a que entonces, a diferencia de ahora,

SIGUE EN LA PAGINA DOCE

# Semilegitimidad.- Mala Defensa de un mal Triunfo

Sigue de la página siete

no había incentivo para ir a votar, al no haber competencia real.

Estos defensores modernos y modernizantes de la supuesta victoria priísta de hoy, aceptan que esta vez también hubo fraudes —no es posible tapar el sol con un dedo, pues los ejemplos concretos del fraude de 1988 han dado ya la vueíta al mundo—, pero a cambio de su aceptación, insisten en que tales “irregularidades” no fueron de una gran magnitud, no fueron masivas, y por tanto no invalidan el hecho de que el candidato del PRI obtuvo la mayoría de los sufragios.

★

**A**NTE tal sinceridad, propongo al lector que por un momento acepte como cierto el aserto de los defensores honorables de la victoria priísta. En otro tiempo, antes de que la irritación de la sociedad con la corrupción e ineptitud de su clase política llegara a los niveles actuales, esos argumentos hubieran, quizá, pacificado los ánimos, pero, claro está, si las circunstancias fueran otras, nadie se habría acordado de defender una victoria priísta con tales argumentos propios

de heréticos. Sin embargo, ahora, esa defensa audaz se queda corta, es insuficiente y, peor aún, inaceptable.

Si como dicen los defensores inteligentes del PRI, las cifras del abstencionismo del pasado 6 de julio son reales, eso quiere decir que son incompatibles con los resultados de todos los comicios pasados, incluido el de Miguel de la Madrid. Desde esa perspectiva, las cifras de las elecciones de 1982 y las anteriores fueron inventadas, falsas y por varios millones. Pero resulta que el candidato presidencial actual del PRI fue, justamente, uno de los arquitectos de la elección de Miguel de la Madrid, ¿cuál fue su responsabilidad en la falsificación de esos resultados? Cualquiera que sea la respuesta a esa pregunta, resulta imposible eludir otra conclusión: el candidato del PRI, como miembro destacado de un gobierno producto de elecciones “inventadas”, ¿no carga él con una parte de la falta de legitimidad original de ese gobierno? Si, de nueva cuenta, los resultados de las elecciones de 1982 no corresponden, ni con mucho, a la realidad, ¿cómo confiar en que el gobierno producto de esas elecciones

—responsable de la organización de los pasados comicios—, se ha abstenido hoy de hacer lo que apenas ayer sí hizo sin el menor empacho?, ¿cómo aceptar sin riesgo de pasar por estúpido que la increíble “caída” del sistema de cómputo fue sólo un accidente y no el principio del fraude a escala nacional organizado por alguien que ya había cometido fraude? Realmente no se puede lanzar lodo sobre el gobierno saliente sin que resulten ensuciados quienes ahora pretenden formar el nuevo, pero fueron parte de aquéllo.

★

**L**OS defensores inteligentes del resultado electoral difundido por la CFE aceptan que en determinadas regiones particularmente fuera de los centros urbanos, hubo fraudes, —para probarlo, ahí está la persistencia de las “casillas soviéticas”— pero que éstos fueron, en conjunto, relativamente insignificantes. La conclusión lógica de tal argumento es, entonces, que el triunfo del candidato priísta es sólo ligeramente fraudulento, y que por

tanto su gobierno será únicamente ligeramente ilegítimo, lo cual es una ganancia respecto del pasado bochornoso. Pero, ¿es posible ahora gobernar iniciando el sexenio en esas circunstancias?, ¿y en una coyuntura económica tan difícil como la actual, cuando estamos a la mitad del río por lo que al cambio de modelo económico se refiere?

La semilegitimidad no promete ser la mejor vía para afrontar las demandas de una sociedad que ya llegó a su límite de tolerancia frente a la incongruencia política en que ha vivido. Pretender asumir hoy una tarea de la magnitud que significa guiar a México en el sexenio próximo sin antes dar una cuenta clara, en términos del mandato de las urnas, es asumir un riesgo histórico muy grande. Ojalá que los modernos defensores del triunfo priísta encuentren, y rápido, argumentos superiores al de la semilegitimidad. Todos los estamos esperando.

P.D.: Me voy un semestre a la Universidad de Columbia. En cuanto me instale enviaré mis colaboraciones desde Nueva York.